



La consulta plantea, si conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, se puede comunicarla lista de profesionales con los datos limitados a los previstos en el artículo 3 j) de la citada Ley Orgánica.

En primer lugar es preciso indicar que la definición contenida en el artículo 3j) relativa a las fuentes accesibles al público se complementa con lo dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley Orgánica 15/1999 que tiene por finalidad clarificar el concepto de fuentes accesibles al público.

Por tanto, para poder considerar el listado de asociados como fuentes accesibles al público se exige la concurrencia de determinados requisitos que se contemplan en el artículo 7.1 c) del Real Decreto 1720/2007 1 “(..)c) Las listas de personas pertenecientes a grupos de profesionales que contengan únicamente los datos de nombre, título, profesión, actividad, grado académico, dirección profesional e indicación de su pertenencia al grupo. La dirección profesional podrá incluir los datos del domicilio postal completo, número telefónico, número de fax y dirección electrónica. En el caso de Colegios profesionales, podrán indicarse como datos de pertenencia al grupo los de número de colegiado, fecha de incorporación y situación de ejercicio profesional.”

En consecuencia, no todos los ficheros que contengan los datos enumerados taxativamente en el artículo han de ser considerados fuentes accesibles al público, sino que para que dicha circunstancia pueda tener lugar, será indispensable que tales ficheros puedan ser libremente accesibles por cualquier persona, bien gratuitamente, bien mediante el abono de una contraprestación. Los ficheros que conteniendo los datos enumerados sean utilizados internamente por el Colegio Profesional o sean de acceso restringido, por ejemplo, a los propios colegiados, exclusivamente, no tendrán la condición de fuente accesible al público.

En este sentido, debe indicarse que la Sentencia de la Audiencia Nacional de 29 de junio de 2001 recuerda que “Las fuentes accesibles al público son aquellas a través de las cuales podemos conocer en bloque, es decir, no mediante consultas puntuales al Colegio Profesional correspondiente a cada colegiado, sino en su totalidad, en forma de listado, los pertenecientes a un determinado colectivo (...) por ser dicho conocimiento, íntegro, de carácter público”.

De este modo, será preciso que exista una divulgación previa del listado de colegiados, de forma que los mismos aparezcan en una publicación divulgada fuera del Colegio, aunque el número de sus destinatarios sea

limitado, no cumpliéndose este requisito en caso de que no exista divulgación externa al Colegio, sino que el censo sea de uso interno o estrictamente limitado a los colegiados.

La existencia de dicha divulgación previa se plasma en el apartado segundo del artículo 7 2. señalando que “En todo caso, para que los supuestos enumerados en el apartado anterior puedan ser considerados fuentes accesibles al público, será preciso que su consulta pueda ser realizada por cualquier persona, no impedida por una norma limitativa, o sin más exigencia que, en su caso, el abono de una contraprestación.”

En consecuencia, el listado previsto en la consulta sólo tendrá la consideración de fuentes accesibles al público cuando concurra las dos circunstancias señaladas;

- Que los datos objeto de cesión se redujeran a aquellos enumerados en el artículo 7.1 c).
- Que los mismos hubieran sido objeto de difusión pública mediante la publicación de un directorio de colegiado.

Por tanto si el listado cumple dichos requisitos podrá tener la consideración de fuentes accesibles al público, con las consiguientes posibilidades de tratar y ceder los dato sin el consentimiento de los afectados, según lo señalado en el artículo 6.2 y 11.2 de la Ley Orgánica 15/1999.

En consecuencia, la publicación en la página web de un listado de asociados, convierte a la lista en fuentes accesibles al público, siempre que previamente se hayan dado los requisitos anteriormente señalados para considerarla como fuente accesible al público, y además se hayan cumplido con los deber que con carácter general impone la normativa de protección de datos tales como, el deber de informar previsto en el artículo 5, o se haya obtenido el consentimiento de los sujetos, en los casos que proceda.

La segunda cuestión, alude al cumplimiento del deber de informar, previsto en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica, describiendo en la consulta el procedimiento utilizado por la consultante para atender dicho deber. Respecto a dicho procedimiento, la Agencia en diversos informes tales como el de fecha 21 de diciembre de 2006 se ha pronunciado sobre la correcta realización del mismo, señalando que;

*Como cuestión previa, es preciso señalar que dado que del contenido de la consulta no se desprende otra cosa, entendemos que “por aviso legal de protección de datos”, se está refiriendo al cumplimiento del deber de informar previsto en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999.*



*El artículo 5.1 de la citada Ley Orgánica establece que “Los interesados a los que se soliciten datos personales deberán ser previamente informados de modo expreso, preciso e inequívoco:*

- a) De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, de la finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios de la información.*
- b) Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que les sean planteadas.*
- c) De las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos.*
- d) De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.*
- e) De la identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en su caso, de su representante”.*

*Dicho lo anterior, la conservación de este consentimiento será imprescindible para asegurar que el tratamiento de los datos se ha adecuado a las exigencias contenidas en la Ley Orgánica. En consecuencia será necesario que se haga constar de alguna forma en el fichero la existencia de esta autorización, conservando, en un soporte que permita asegurar su autenticidad, la conformidad del afectado con el tratamiento de sus datos, y asegurando asimismo que el afectado tiene pleno conocimiento de los extremos requeridos por el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999. En consecuencia la existencia de dicho consentimiento deberá conservarse por la entidad consultante, tanto en el supuesto de los colegiados antiguos como en el de sus nuevos colegiados.*

*En este sentido, debe señalarse que la Audiencia Nacional ha analizado el efecto probatorio de la notificación a los interesados del tratamiento de sus datos personales en su Sentencia de 31 de mayo de 2006 donde viene a modular el criterio sostenido por la Sentencia de 24 de enero de 2003, reconociendo, precisamente, la posible acreditación de la recepción a través de indicios que permiten desvirtuar la alegación del afectado, señalando que “y aún en el caso de que no lo desvirtuaran plenamente introducen las suficientes dudas como para que entendamos aplicable el principio del favor rei, principio general aplicable en la valoración de la prueba tanto en los procesos penales como en los procedimientos administrativos sancionadores”.*

*En consecuencia, la Audiencia Nacional viene a reconocer que sin perjuicio de que la carga de la prueba de la notificación corresponde al responsable del fichero, será suficiente para lograr esa acreditación la aportación de indicios suficientes que coadyuven a entender cumplido el requisito.*

*Ciertamente, los posibles indicios a aportar podrán diferir en cada caso. En el supuesto analizado por la Sentencia de 31 de mayo de 2006, se aceptaron como indicios “la inclusión en el fichero auxiliar de notificaciones de esta comunicación como realizada” y el hecho de que “(el afectado) se dirige a (la recurrente) sabiendo que sus datos están incluidos en el fichero y quien había sido la entidad informante de los mismos sin que se haya acreditado mínimamente que dicho conocimiento lo obtuvo de forma distinta de la comunicación que dice haber realizado (la recurrente), y, finalmente, “el hecho de que al domicilio al que aparece dirigida la comunicación que se niega haber recibido, se han remitido otras comunicaciones de las que el denunciante ha tenido perfecto conocimiento”.*

*No obstante, podría resultar conveniente la utilización de medios fiables, independientes y auditables para la realización de las notificaciones o la obligación de comprobación de que los envíos no han sido devueltos por su destinatario. Al tratarse de medios independientes, en el caso planteado, resultaría aconsejable que la acreditación de dichos envíos y las posibles devoluciones las efectuará una persona distinta al secretario general del Colegio.”*

En virtud de lo dispuesto y lo señalado en la consulta, podemos concluir que siempre que la entidad contratada para realizar los envíos sea independiente de la consultante y permita acreditar éstos y las posibles devoluciones, el procedimiento resulta correcto.

En cuanto a la última cuestión, está plenamente vinculada con el concepto de fuentes accesibles al público al que hemos hecho referencia anteriormente, por tanto si la lista de colegiados cumple con los requisitos para considerarla d fuentes accesibles al público, se podrá comunicar a cualquier solicitante.